



REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO
JUZGADO CUARTO ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO DE TUNJA

Tunja, treinta y uno (31) de enero de dos mil diecinueve (2019)

Medio de control: Ejecutivo

Radicado: 15001 33 33 003 **2018 00174 00**

Demandante: Ana Francisca Rosa Martino de Fajardo

Demandado: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Construcciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP.

I. ASUNTO

Procede el Despacho a pronunciarse sobre el mandamiento de pago dentro del proceso ejecutivo promovido por Ana Francisca Rosa Martino de Fajardo contra la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Construcciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP.

II. ANTECEDENTES

La parte demandante solicitó se libre mandamiento de pago contra la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Construcciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP y a favor de Ana Francisca Rosa Martino de Fajardo, por los siguientes conceptos¹:

*“b) Por la suma de **CUATRO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL CIENTO CINCUENTA Y CUATRO PESOS (\$4.275.154)**, por concepto de INTERESES MORATORIOS AL DTF, causados sobre la suma de \$110.045.390 (monto que por mesadas atrasadas indexadas a la fecha de ejecutoria de la sentencia adeuda la entidad), a partir del 29 de mayo de 2014, día siguiente a la ejecutoria de la sentencia, al 28 de agosto de 2014; y desde el 09 de marzo de 2015, hasta el 08 de octubre de 2015, fecha en que se cumplen los 10 meses de que trata el artículo 195 C.P.A.C.A.*

*c) Por la suma de **TREINTA Y OCHO MILLONES CIENTO SESENTA Y CINCO MIL CIENTO SESENTA Y DOS PESOS (\$38.175.162)**, por concepto de INTERESES MORATORIOS COMERCIALES, causados a partir del 09 de octubre de 2015 (día siguiente al cumplimiento de los 10 meses de que trata el art. 195 del C.P.A.C.A) al 26 de octubre de 2016, fecha en que la entidad pagó.*

¹ Ver folio 4.

d) Por las sumas que resulten de la INDEXACIÓN de los intereses moratorios que se causen sobre el valor de \$41.691.085, desde el día siguiente a que la entidad ejecutada pagó (27 de octubre de 2016) hasta que se cumpla la totalidad de la obligación por la entidad ejecutada.”

III. CONSIDERACIONES

- Competencia

En los términos de los artículos 104 numeral 6 y 297 del CPACA, este Juzgado es competente para conocer de la presente ejecución, toda vez que se demanda por vía ejecutiva el cumplimiento de la condena contenida en sentencia de 12 de septiembre de 2013, proferida por este Despacho Judicial, dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho N° 15001 33 33 004 2012 00041 00, revocada y confirmanda por el Tribunal Administrativo de Boyacá con providencia de 22 de mayo de 2014, y que cobró ejecutoria el 28 de mayo de 2014 (f. 28).

De otro lado, en virtud del numeral 7 del artículo 155 *ejusdem*, este Despacho sería competente para conocer de esta demanda en razón de la cuantía, al encontrar que la misma no superaría la suma de mil quinientos (1500) salarios mínimos legales mensuales vigente (f. 6).

- Del título ejecutivo:

En los términos del artículo 297 del CPACA, constituyen título ejecutivo para esta jurisdicción, entre otros documentos, los siguientes:

“Artículo 297. Título ejecutivo. Para los efectos de este Código, constituyen título ejecutivo:

1. Las sentencias debidamente ejecutoriadas proferidas por la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, mediante las cuales se condene a una entidad pública al pago de sumas dinerarias. (...)”

Con relación al contenido del título ejecutivo, el artículo 422 del Código General del Proceso dispone:

“Pueden demandarse ejecutivamente las obligaciones expresas, claras y exigibles que consten en documentos que provengan del deudor o de su causante, y constituyan plena prueba contra él, o las que emanen de una sentencia de condena proferida por el juez o tribunal de cualquier jurisdicción, o de otra providencia judicial, o de las providencias que en procesos de policía aprueben liquidación de costas o señalen honorarios de auxiliares de la justicia, y los demás documentos que señálela ley....”.

A su turno, el Consejo de Estado ha señalado que el artículo 488 del Código de Procedimiento Civil (hoy art. 422 del CGP), estableció las condiciones formales y de fondo que debe reunir el título ejecutivo, las primeras, en el sentido de que los documentos que integran el título conformen una unidad jurídica, es decir, que sean **auténticos**, y que emanen del deudor o de su causante; **de una sentencia de condena proferida por el juez** o tribunal de cualquier jurisdicción, de otra providencia judicial **que tenga fuerza ejecutiva** conforme a la ley, **de las providencias que en procesos contencioso administrativos** o de policía aprueben liquidación de costas o señalen honorarios de auxiliares de la justicia; las segundas, por su parte, buscan que en los documentos que sirven de base para la ejecución **aparezcan consignadas obligaciones claras, expresas y exigibles a favor del ejecutante y a cargo del ejecutado**, y que sean líquidas o liquidables por simple operación aritmética, en el caso de obligaciones pagaderas en dinero.²

En ese sentido, la obligación es expresa cuando se encuentra especificada en el título ejecutivo, en cuanto debe imponer una conducta de dar, hacer o no hacer. Debe ser clara, en el sentido de que los elementos de la obligación (sujeto activo, sujeto pasivo, vínculo jurídico y la prestación u objeto) deben estar determinados o, por lo menos, pueden identificarse por la simple revisión del título ejecutivo. Por su parte, La obligación es actualmente exigible cuando no está pendiente de cumplirse un plazo o condición³.

Por su parte, el Tribunal Administrativo de Boyacá ha expresado que cuando el titular de la obligación fallece para demostrar la titularidad de la obligación se hace necesario la conformación de un título complejo, y que el tratamiento jurídico de las sumas causadas debe hacerse: i) desde la fecha de efectos fiscales de la providencia judicial hasta la muerte del causante y ii) desde el día siguiente al aludido fallecimiento en adelante, pues este es sustancialmente diferente para cada caso.⁴

VI. CASO CONCRETO

Bajo las anteriores precisiones, y de la revisión del expediente se advierten las siguientes circunstancias:

- El beneficiario de la sentencia condenatoria base de recaudo fue el señor Luis Abraham Fajardo Rojas, identificado con la cedula de ciudadanía N° 17.021.002, pues era el titular de la pensión de jubilación que se ordenó reliquidar.

² Consejo de Estado. C.P. María Elena Giraldo Gómez, auto de 16 de septiembre de 2004, radicado bajo el número 26.726

³ Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Cuarta, Consejero Ponente: Julio Roberto Piza Rodríguez, Bogotá D.C., quince (15) de noviembre de dos mil diecisiete (2017), Radicación número: 54001-23-33-000-2013-00140-01(22065)

⁴ M.P José Ascención Fernández Osorio, auto de 08 de mayo de 2018, radicado 15001333300120170017801.

- La Resolución RDP 032520 de 04 de enero de 2016, dio cumplimiento a la orden judicial, y dispuso la reliquidación de la pensión de jubilación del señor Fajardo Rojas, aclarando que el pago de las diferencias le serian canceladas por el Fondo de Pensiones Públicas del Nivel Nacional.
- En la demanda se solicitó ordenar el pago de los intereses moratorios a la señora Ana Francisca Rosa Martino de Fajardo, pero no se explicó por qué, pues en los hechos nada se dijo respecto a la muerte del titular, ni la relación que ostentaba con la accionante, únicamente en el poder se indicó que obra como cónyuge sobreviviente.

En ese orden, en el presente caso no resulta clara la obligación en cuanto al sujeto activo titular de la prestación, máxime, que no se configuró el título complejo necesario para librar el mandamiento de pago a favor de la ejecutante, por cuanto no allegó documento que la acredite como acreedora de la obligación que reclama.

Es de aclarar que conforme a la jurisprudencia citada, dicho documento necesariamente debe provenir del deudor, para que pueda esgrimirse en su contra⁵, es decir, de la Unidad de Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social, y expresar que la accionante tiene derecho a la obligación que reclama, esto es, al pago de los intereses moratorios generados con ocasión del cumplimiento de la sentencia dictada dentro de la nulidad y restablecimiento del derecho N° 15001 33 33 004 2012 00041 00, en la medida que, hasta donde se sabe, estos dineros se causaron antes del fallecimiento del pensionado.

Por tanto, y en gracia de discusión, no bastaría con que a la demandante fuera reconocida como beneficiaria de la sustitución pensional del señor Luis Abraham Fajardo Rojas, (circunstancia que tampoco se acreditó dentro del proceso), ya que este es un derecho que nació al momento del fallecimiento del cónyuge titular, y como se explicó tiene un tratamiento jurídico diferente.

Así las cosas, es de resaltar que cuando se ejecuta con fundamento en una providencia judicial, en este caso una sentencia, para efecto de configuración del título ejecutivo, es indispensable que todos y cada uno de los documentos que lo conforman en su conjunto evidencien la existencia de la obligación con las características previstas en el artículo 422 del CGP, y sean aportados en legal forma para poder librar mandamiento de pago, dado que el juez de la ejecución no se encuentra facultado para disponer la corrección de la demanda con la finalidad de configurar dicho título, según ha señalado de manera reitera el Consejo de Estado⁶

⁵ Así lo señaló el Superior en la providencia que se acaba de citar.

⁶ Consejo de Estado. Sección Tercera. auto de 12 de septiembre de 2001, expediente 20.286. CP Dra. María Elena Giraldo Gómez; auto de 12 septiembre de 2002, expediente 22.235 CP Dr. German Rodríguez Villamizar.

En este contexto, el artículo 430 del Código General del Proceso, establece al respecto:

"ART. 430. Mandamiento ejecutivo. Presentada la demanda acompañada de documento que preste merito ejecutivo, el juez librará mandamiento ordenando al demandado que cumpla la obligación en la forma pedida, si fuere procedente o en la que aquel considere legal..."

Conforme a la redacción de la norma, el juez debe librar el mandamiento de pago, cuando se acompañe con la demanda, el documento idóneo completo que sirva de fundamento para la ejecución. Al respecto, Máximo Tribunal de lo Contencioso Administrativo ha sostenido que las opciones que tiene el juez frente a la demanda ejecutiva son:

"1) Librar mandamiento de pago cuando los documentos aportados con la demanda contienen una obligación clara, expresa y exigible, esto es, constituyen título ejecutivo.

2) Negar el mandamiento de pago porque junto con la demanda no se aportó el título ejecutivo

*3) Disponer la práctica de las diligencias previas solicitadas en la demanda ejecutiva que cumplan los supuestos legales (art. 489 C. de P.C.), las cuales, una vez cumplidas, conducen al juez a proferir el mandamiento de pago si fueron acreditados los requisitos legales para que exista el título ejecutivo, o negarlo en caso contrario."*⁷

En conclusión, como los documentos aducidos como título de recaudo no dan cuenta de que la ejecutante ostente la calidad de acreedora de la obligación, el Despacho negará el mandamiento de pago deprecado.

Por lo brevemente expuesto, el Juzgado Cuarto Administrativo Oral del Circuito de Tunja,

RESUELVE

PRIMERO.- Negar el mandamiento de pago solicitado por Ana Francisca Rosa Martino de Fajardo contra la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Construcciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO.- Devuélvanse los anexos sin necesidad de desglose.

TERCERO.- Reconocer personería al abogado Ligio Gómez Gómez, identificado con cédula de ciudadanía N° 4.079.548 y T.P. N° 52.259 C.S.J., como apoderado

⁷ Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. C.P. Dra. María Elena Giraldo Gómez, expediente 13103.

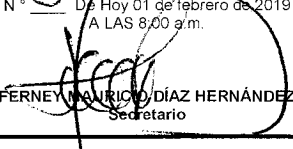
especial de la parte ejecutante, en los términos y para los efectos del memorial poder conferido y que obra a folio 3 del expediente.

CUARTO.- Una vez ejecutoriada esta providencia, archívense las diligencias, dejando las anotaciones y constancias de rigor.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE


ÁNGELA MARÍA JOJOA VELÁSQUEZ
Juez

⁸CZ

JUZGADO CUARTO ADMINISTRATIVO DE ORALIDAD DEL CIRCUITO DE TUNJA
NOTIFICACIÓN POR ESTADO
LA ANTERIOR PROVIDENCIA SE NOTIFICA POR ESTADO ELECTRÓNICO
N° <u>3</u> De Hoy 01 de febrero de 2019 A LAS 8:00 a.m.
 FERNEY MAURICIO DÍAZ HERNÁNDEZ Secretario

⁸ Esta providencia fue notificada en estado electrónico el 01 de febrero de 2019 en la página web www.ramajudicial.gov.co. Ferney Mauricio Díaz Hernández – Secretario